

LECTURA POLITICA DE LOS SECUESTROS

Tomás R. Campos

Resumen

Los secuestros de los alcaldes y, sobre todo, el secuestro de la hija del presidente Duarte, han desatado una serie de acontecimientos políticos de gran magnitud. Este artículo analiza políticamente el curso de los acontecimientos hasta llegar a su desenlace. Las bases de documentación son principalmente las comunicaciones entre la presidencia y el comando Pedro Pablo Castillo, tal como pudieron ser captadas por los periodistas, las distintas manifestaciones públicas de las partes interesadas y noticias periodísticas que han podido ser confirmadas. Tras la narración crítica de los diversos pasos y etapas, se concluye el artículo con 12 puntos de reflexión que sirven para medir la importancia de lo ocurrido y pueden contribuir a su interpretación correcta.

Lo que se pretende analizar en este comentario no es el problema general de los secuestros, sino el caso particular de la última racha de secuestros, emprendida por el FMLN. Primero fueron los alcaldes de la zona oriental, atribuibles al ERP; después el llamativo secuestro de la hija del presidente Duarte y de su compañera, más tarde el de los alcaldes de la zona norte, atribuibles a las FPL.

Ante todo, se impone una distinción. Una cosa son los secuestros de alcaldes y otra el de la hija del presidente. Aunque a última hora el FMLN ha querido dar razones políticas justificativas de este secuestro, son de distinta índole de

las que ha dado como justificación del caso de los alcaldes. Sin embargo, está la diferencia fundamental de que el secuestro de los alcaldes fue anunciado como del FMLN inmediatamente, mientras que el de la hija del presidente se atribuyó al comando Pedro Pablo Castillo, quien casi hasta el final de las negociaciones fue la contraparte formal del gobierno, mientras el FMLN se presentaba como su intermediario. La motivación era además completamente distinta: los alcaldes fueron secuestrados por sí mismos, por desempeñar una función político-militar en zonas controladas por el FMLN, mientras que la hija del presidente fue secuestrada con un defini-

do propósito de canje. El curso de los acontecimientos llevó a que los alcaldes sirvieran también para canjes y la hija del presidente para algo más que un mero canje, pero esto no obsta para que fuera muy distinto el motivo principal de las capturas.

Analicemos brevemente la captura de los alcaldes. Se inicia como una operación del ERP en la zona oriental. Son alcaldes que acaban de tomar posesión de sus puestos y que ya para el 18 de julio se sentían abandonados por el ejecutivo, el cual no hacía nada por ellos y al cual señalaban que por su libertad el FMLN exigía la resolución de nueve casos de "desaparecidos." En esa carta se decía también que, en la zona oriental de un total de 82 municipios, 58 no tenían presencia y cuidado permanente de la Fuerza Armada, por lo que sólo 12 alcaldías funcionaban fuera de las cabeceras departamentales, lo cual es prueba suficiente de la irregularidad política y militar de la situación. Posteriormente al secuestro de la hija del presidente, las FPL, en la tercera semana de septiembre, capturaron a un nuevo grupo de alcaldes, quienes con excepción del alcalde de El Paisnal, lugar próximo a San Salvador, ejercían sus funciones en las zonas más extremas de Chalatenango.

Si se analizan los lugares de capturas y se atiende al razonamiento explicativo del FMLN, estaríamos ante una acción que responde a la estrategia común del FMLN. Esta estrategia, dirigida al debilitamiento o al desgaste permanente del gobierno y de las fuerzas que lo apoyan, no se desarrolla tan sólo en una línea militar, sino también en una línea política. El caso de los alcaldes responde a una línea político-militar. En cuanto acción política con las capturas se pretenden demostrar ciertos puntos importantes: a) las elecciones carecen de sentido real en algunas zonas del país, por cuanto el resultado de las mismas no pueden ser garantizado por un gobierno y una Fuerza Armada los cuales consideran dichos lugares como sitios que no pueden resguardar; b) hay zonas en el país que no pueden ser controladas de forma permanente por el gobierno y la Fuerza Armada y que están, al menos, tanto en manos de una como de otra de las partes en conflicto; c) hay zonas en que está instalado un cierto poder popular que responde más a los dictados del FMLN que a los dictados del gobierno. En cuanto acción militar se pretende frenar la táctica gubernamental de emplear a los alcaldes con un cierto sentido militar, en cuanto ponen en

marcha la defensa civil y con ella una fuerza militar, así como un cierto servicio de inteligencia que controla los movimientos guerrilleros por esas zonas. De ahí la decisión del FMLN de no permitir que los alcaldes, conectados como están con el poder ejecutivo, tanto política como militarmente, desempeñen su función en zonas que están bajo control del FMLN o simplemente bajo control compartido. Así como el gobierno persigue a los responsables del poder popular en las zonas controladas por él, así el FMLN persigue a los alcaldes en zonas controladas por él o a las que tiene acceso. Se establece con ello la teoría de los dos poderes. Hay en El Salvador dos poderes con sus ejércitos propios, con su organización política propia, con su población propia, con su propia autosuficiencia. Nadie pretende afirmar que cuantitativamente sean comparables ni que lo sean cualitativamente, excepción hecha en algún sentido de lo militar. Pero el hecho de los dos poderes no sólo se da ya en alguna medida sino que su acrecentamiento parece ser una línea estratégica del FMLN, el cual trataría de ampliar su radio de acción, haciendo sentir su fuerza, aunque sea esporádicamente, en las zonas urbanas más densamente pobladas y aun en las capitales. Lo que hasta ahora se hacía sentir militarmente en zonas cada vez más extensas y distantes en sabotajes y paralizaciones del tráfico, se prolongará en acciones contra representantes cualificados del poder civil y militar gubernamentales. Se trata, en definitiva, de una ampliación de la guerra, no sólo en más lugares del territorio, sino con nuevas líneas de acción.

La captura de la hija mayor del presidente Duarte es en algún sentido muestra de la ampliación de ese tipo de acciones. Esto no carece de precedentes. Están, ante todo, los secuestros antiguos —los casos de Borgonovo y de Poma, entre otros— cuya finalidad eran conjuntamente la de adquirir fondos y la de lograr intercambio de guerrilleros importantes. Pero esto había dejado de ser línea de acción ordinaria, aunque ocurriera a modo de excepción. Así, en los primeros días de la presidencia de Duarte se dio el secuestro de un hermano del ministro de defensa con la finalidad de liberar a un guerrillero importante de la RN; la acción pudo llevarse a cabo con rapidez y secreto, lo cual facilitó la solución del secuestro. A este mismo esquema obedeció la captura de Inés Guadalupe Duarte y de su compañera Ana Cecilia Villeda. No habiendo podido el FMLN conseguir la liberación de dos

importantes miembros del PC a través de canje con los alcaldes ya secuestrados, se decidió la captura de la hija de Duarte, lo cual implicaba que a) se tenía presente la posibilidad de recurrir al secuestro en caso extremo, b) se tenía asimismo presente la posibilidad de capturar, entre otros, a la propia hija del presidente. No es pensable que una acción de esta envergadura pudiera planearse de improviso, incluso aun en el caso de que no tuviera que lograrse previamente un acuerdo por parte de todo el FMLN.

¿Fue, sin embargo, la captura de la hija del presidente decisión compartida por todo el FMLN? Como es sabido, durante las primeras fechas nadie se hizo responsable del secuestro, pero enseguida se hizo cargo de él el comando Pedro Pablo Castillo, que, como tal, no se había hecho presente hasta entonces. La adopción de este formalismo significa, por lo menos, que el FMLN consideró que no debía hacerse responsable pleno de la acción, sobre todo si tenemos en cuenta que casi hasta el final del proceso se mantuvo la formalidad de que el presidente Duarte debió relacionarse directamente sólo con el comando a través de la radio, quedando formalmente fuera de los arreglos no sólo el FDR, sino también el FMLN en su conjunto. Caben dos hipótesis para explicar este comportamiento: una,

que el FMLN quiso precaverse del daño político que le podía causar una medida, repudiada inmediatamente por más de 37 países democráticos y otras muchas organizaciones nacionales y extranjeras; otra, que no fue el FMLN inicialmente quien proyectó el secuestro, sino una de las organizaciones político-militares, concretamente el PC y las FAL, por su propia cuenta con el fin específico de liberar a dos miembros importantes de esa organización. La cuestión tiene su importancia si miramos hacia atrás, pero no la tiene si miramos hacia adelante. Así como es claro que el FMLN no quiso presentarse como el responsable inmediato del secuestro, así también es claro que acabó haciéndose responsable de él hasta el punto de defenderlo como una victoria política, de modo que en el último momento de las negociaciones desapareció la formalidad del Pedro Pablo Castillo para asumir las decisiones finales una representación conjunta del FMLN. Las radios rebeldes que en un primer momento mantuvieron un mutismo casi absoluto sobre el caso, sólo al final se hicieron portavoces entusiastas de las razones que lo motivaron y de los resultados obtenidos.

A esta prudencia política del FMLN se contraponen la reacción excesivamente subjetivada del presidente. Lo que tal vez pudo haberse re-



Ante todo se impone una distinción. Una cosa son los secuestros de los alcaldes y otra el de la hija del presidente.

suelto casi en secreto —canje de la hija del presidente por unos pocos presos políticos— se convirtió en un problema público y político de grandes dimensiones. El discurso presidencial del 15 de septiembre, centrado en gran parte sobre la captura de su hija, hizo ver al FMLN que tenía en sus manos grandes posibilidades de éxitos políticos y no sólo de recuperación de sus gentes. Es en este momento donde empezó a revertirse el descrédito político en el cual había caído el FMLN, que todavía sólo era presunto responsable del secuestro. Al percibirse de la importancia personal que daba al caso el presidente, el FMLN decidió aumentar sus peticiones y empezó a jugar con el desgaste político que la prolongación de las negociaciones podría causar al gobierno, máxime si se consideraba que las comunicaciones se hacían por radio con conocimiento de las mismas tanto por parte de los periodistas como por parte de los cuarteles.

Es entonces cuando el FMLN presentó sus peticiones iniciales. Por la hija del presidente (y su compañera) exigió la libertad de 25 presos políticos, lista que se extendió a 34, porque no aceptó como muertos a 9 cuadros desaparecidos, de los cuales el principal es la comandante del ERP, Janet Samour. Ofrecieron, sin embargo, mantener en secreto el acuerdo al que se llegara, punto sumamente importante para comprobar que la operación no tenía en un primer momento un alcance político general y público, sino más bien restringido y pragmático. Aunque había serias dudas sobre la vida de 9 de los reclamados, se quería llegar a la mayor seguridad posible sobre el caso y no tanto se pretendía suscitar tensiones entre los militares y el gobierno por reclamar en favor de desaparecidos, ni siquiera ocasionar un desgaste a Duarte porque algunos de esos desaparecidos no respondían a su presidencia actual. En este momento, por tanto, era más la insistencia en lograr la recuperación de los cuadros que en hacer daño al gobierno de Duarte. Esto era lo que se quería resolver inicialmente.

Por otra vía, sin embargo, el FMLN estaba negociando el caso de los alcaldes, a cambio de los cuales pedía la salida del país de 96 lisiados y la puesta en libertad de 29 sindicalistas. Se trataba de dos negociaciones distintas y en principio

independientes: la de Inés Guadalupe Duarte era entre el comando Pedro Pablo Castillo y el presidente, no tenía mediador y se hacía por radio, mientras que buscaba la libertad de quienes difícilmente podría obtenerse a no ser por una medida de fuerza; por otro lado, la de los alcaldes que se hacía entre el FMLN y el gobierno, con mediador, y en la cual se pedía la libertad de lisiados —ya acordada de algún modo en Ayagualo— y de quienes no eran formalmente miembros del FMLN. Sólo más tarde se entrecruzaron estas dos negociaciones e incluso la segunda pasó a tomar prioridad, dejando el FMLN el caso de Inés Guadalupe Duarte como última carta de reserva que asegurarse toda la operación en conjunto. Esta acumulación puso nuevas dificultades al problema e incluso desató una crisis política importante.

Mientras el caso se presentó como un problema predominantemente personal en el cual el presidente de la república de El Salvador era extorsionado por terroristas subversivos, el respaldo tanto interno como externo fue casi total. Tanto por razones de humanismo emocional como por solidaridad con un presidente quien, en razón de serlo, era atacado como padre, fueron muchos, dentro y fuera, los que se pusieron de su parte. La Fuerza Armada, los partidos de derecha, no excluido ARENA con su entonces presidente, el ex-mayor D'Aubuisson, los medios de comunicación, la asamblea y la corte suprema, la Iglesia, etc., no sólo condenaron el hecho, sino que se presentaron a ayudar. Se habló explícitamente de que la situación de El Salvador y prácticas anteriores ni siquiera debieran excluir canjes con prisioneros políticos. En el exterior la solidaridad también fue grande. Con todo ello aumentó el prestigio de Duarte a la par que disminuyó la credibilidad del FMLN, a quien se seguía atribuyendo el delito. Nunca hasta entonces había conseguido el presidente tanto apoyo y respaldo.

Pero el tiempo empezó a jugar contra esta solidaridad. El FMLN empezó a ver la posibilidad de contrarrestar su error político inicial en la doble línea de aumentar sus demandas y de, en consecuencia, hacérselo más difícil a Duarte y lograr con ello que se resintiese la solidez de quienes lo apoyaban, especialmente la de un sec-

Así como el gobierno persigue a los representantes del poder popular en las zonas controladas por él, así el FMLN persigue a los alcaldes en zonas controladas por él o a las que tiene acceso. Así se establece la teoría de los dos poderes.

tor de la Fuerza Armada y también la de los sectores más derechistas, los cuales habían medido por su parte no sólo la consolidación de Duarte, sino también, por la prolongación de las negociaciones, las posibilidades de destruirlo políticamente. Todo ello se agravó cuando el FMLN lanzó un importante ataque al CEMFA, donde se entrenan los nuevos reclutas bajo la asesoría norteamericana en la guerra de contrainsurgencia; el ataque fue el más fuerte en muchos meses y ocasionó a la Fuerza Armada 46 muertos y 68 heridos, según la versión oficial, y más de 200 bajas según la versión del FMLN. Algunos jefes argumentaron que tal debacle se debió al debilitamiento del ejecutivo, producto de un proceso negociador vacilante, lento y sometido más a las exigencias del dolor paterno que a las obligaciones del puesto presidencial. El tiempo iba en contra del arreglo y se rumoró acerca de una crisis que podría poner en peligro la presidencia de Duarte. Hasta el embajador norteamericano tuvo que salir a defender públicamente a Duarte y a mostrar a sectores militares y políticos que la embajada de Estados Unidos estaba con Duarte no como negociador, sino como presidente.

Y es que la embajada norteamericana estuvo desde un principio contra la negociación y a favor de medidas de fuerza. La teoría norteamericana de no negociar con terroristas, robustecida en estos días con el acto de piratería aérea contra los secuestradores del barco italiano *Achille Lauro*, iba cobrando mayor fuerza. Sectores intransigentes proponían responder al secuestro con secuestros y a la posible muerte de Inés Guadalupe con la muerte de familiares de guerrilleros cuando no de otras personas que nada tenían que ver con ella. Si esta opinión no prevaleció, fue porque Duarte es necesario para los norteamericanos y porque Duarte no quería poner en peligro la vida de su hija. El presidente que no había querido ceder a la propuesta de canje con ocasión de los alcaldes, quería canjear en el caso de su hija, quería hacer todo lo posible por salvar a su hija. Pero si prevaleció la postura que pretendía salvar a Duarte como presidente, se empeñaron los límites del canje. No se podía dejar fuera el caso de los alcaldes y, sobre todo, no se podía pasar de la oferta inicial de

sobrepasar el número de los prisioneros ofrecidos para el canje. Sólo 25, los primeros 25 pedidos, por la hija del presidente, y nada de concesiones en la exigencia de responsabilidades por los otros 9 desaparecidos. Al problema personal del presidente no se le podía hacer más concesiones políticas. Para muchos se trataba de un problema puramente personal, el cual no podía poner en peligro la guerra de contrainsurgencia y, mucho menos, el proceso político.

Sin embargo, no podía dudarse de que no se trataba de un problema puramente personal y de que la solución del mismo no tenía más que ventajas personales. El resolver por la fuerza el problema del secuestro o el de resolverlo a través de negociaciones podía constituir un viraje esencial en el proceso político salvadoreño. Efectivamente, si el secuestro terminaba con la muerte de la hija del presidente o simplemente con la prolongación indefinida de su retención, quedaban robustecidas las posiciones intransigentes tanto en lo que tocaba al cierre definitivo del diálogo como en lo que tocaba a un incremento cuantitativo y cualitativo del terror; por ambos extremos habría terminado o se habría dificultado notablemente el proceso de apertura política. Los enemigos del diálogo buscaban que se diera una mala solución al problema. Con ello se habría demostrado que el diálogo es imposible y que no cabe acuerdo racional con el FMLN que, recurriría a acciones terroristas, entrando así en una más grave espiral de violencia, fatal para la mayoría del pueblo salvadoreño. Se trataba, por tanto, de un problema esencialmente político, surgido de un problema humano; por tanto su solución debía ser política sin que esto implicara olvidar los aspectos humanos. Había que salvar o simplemente facilitar un proceso de democratización, de humanización del conflicto, de fortalecimiento de las soluciones políticas dialogadas y de abandono de las soluciones de fuerza. Una cosa es que este problema político se enfocara con exceso de subjetividad y personalismo y otra que fuera en sí mismo un problema político por el sistema de relaciones que implicaba.

Este pareció ser el punto de vista de los mediadores. Cuando el gobierno se vio imposibilitado de ponerse en contacto con los responsables

últimos y totales del secuestro, acudió a quienes podrían sacarle del impasse. Acudió en primer lugar al FDR, pero el FDR le respondió que nada tenía que ver con este hecho y que poco podía hacer en consecuencia para resolverlo. Acudió a fuerzas afines al FDR que pudieran tener cierta autoridad con el FMLN, como la Internacional Socialista y esto sí le permitió, ciertamente con el apoyo del FDR, acercarse al FMLN en busca de una solución negociada. Acudió también a la Iglesia de El Salvador a través del arzobispo de San Salvador y del rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Los representantes de la Iglesia aceptaron contribuir a la solución del problema tanto por razones humanitarias como por razones políticas, siempre desde una perspectiva ética que busca el mejor servicio, no a los políticos, sino al pueblo salvadoreño. Lograr la libertad de presos, la curación de heridos, etc., es una labor humanitaria y humanizadora, que no puede ser descuidada por la Iglesia; pero también ha sido y sigue siendo interés primordial de la Iglesia resolver el conflicto salvadoreño por la vía del diálogo y de la negociación. Si con su intervención frenaba por un lado a los enemigos del diálogo y por otro demostraba en la práctica cómo pueden conseguirse resultados positivos con él, estaba favoreciendo que el proceso político salvadoreño se enrumbara por caminos constructivos, sobre todo si se lograban garantías para limitar al máximo los excesos por parte y parte.

Con este espíritu, los representantes de la Iglesia se dedicaron a la tarea y pronto pudieron ponerse en contacto con el FMLN con conocimiento y aprobación del gobierno, para poder determinar si era el responsable del secuestro y, en caso positivo, hacer más rápida y segura la ne-

gociación. La Iglesia y la UCA pudieron lograrlo en razón de la credibilidad alcanzada con el FMLN. Esta credibilidad que viene de los tiempos de Mons. Romero y que se ha conservado con Mons. Rivera hizo posible que se lograra una reunión de los representantes de la Iglesia con los supremos comandantes de las FPL, quienes para ello contaban con la autorización del FMLN. En una situación de tan alta conflictividad como la de El Salvador se necesitan instancias a las cuales se pueda recurrir con confianza por ambas partes en conflicto. Esto es sumamente difícil, pero es necesario. Y ha sido posible en este caso, como lo ha sido también en el caso más general del diálogo.

A raíz de estas primeras conversaciones se pudo determinar que las negociaciones deberían llevarse con el FMLN, aunque éste se mostraba formalmente como intermediario del comando Pedro Pablo Castillo, pero con autoridad plena para negociar. Entretanto también pudo entrar en contacto con el FMLN el prominente hombre de la Internacional Socialista, Wichsnewski, quien actuaba a petición de Willy Brandt. Fue Wichsnewski quien trajo al país una propuesta más elaborada, en la cual aparecían concatenados los casos de los alcaldes y de Inés Guadalupe, pero concatenados de tal forma que pasaba a primer plano el caso de los alcaldes y quedaba en segundo el de Inés Guadalupe. No sólo esto, sino que el FMLN exigía la salida del país de los heridos, la libertad de los presos de las organizaciones populares, los 22 presos y el compromiso de Duarte a proseguir la investigación sobre los 9 desaparecidos. Con ello la situación se volvió crítica por que a la altura del 14 de octubre el gobierno y la Fuerza Armada sólo querían negociar el caso de la hija del presidente y de Ana Cecilia



ofreciendo la libertad de los 22, aunque pidiendo por esta libertad también la de los alcaldes, sin aceptar las exigencias específicas que para la liberación de éstos había hecho el FMLN. El gobierno no podía comprometerse más que a dar la libertad a 22 y el FMLN no se contentaba con ello.

Pero también a la Iglesia se le convocó por parte del FMLN a discutir la propuesta en el bastión guerrillero de Guazapa, donde la esperaron 6 comandantes quienes representaban a todos los grupos y actuaban mancomunadamente como plenipotenciarios. La Iglesia fue a esta reunión convencida de las limitaciones que había en la negociación, pues oficialmente sólo se había concedido la oferta de libertad de los 22 presos. Pero fue también convencida de que urgía una solución rápida y justa al conflicto de intereses, pues el retraso en la solución y mucho más una mala resolución, podría complicar el proceso del país y empeorar la situación de quienes estaban privados de su libertad. Por otro lado, estaba convencida de que el problema de los lisiados debía resolverse cuanto antes, ante todo porque se trataba de una acción humanitaria impostergable y después porque es algo prescrito en convenios internacionales a la par que un acuerdo apalabrado en Ayagualo. Por ello, la propuesta de la Iglesia, equilibrada entre lo que era posible y lo que era deseable, se inclinó a resolver primero el canje de Inés Guadalupe y Ana Cecilia Villeda por los 22 presos, para entrar de inmediato en la solución del problema de los alcaldes, de los lisiados y de los miembros de las organizaciones populares no militarizados. En el orden de los valores lo que a la Iglesia más le importaba era el caso de los desaparecidos y de los lisiados sin descuidar tampoco el caso de los presos y secuestrados, pero en el orden de la efectividad veía la conveniencia de empezar con el caso de los presos y secuestrados. En Guazapa se pudo avanzar en esta dirección de modo que quedó resuelta, en principio, la primera parte del canje de los 22 presos por las 2 secuestradas, mientras que quedó por resolver el problema de los alcaldes y de los lisiados.

Sin embargo, el FMLN consideró posteriormente que no podía resolverse el problema de las dos mujeres secuestradas sin dejar resuelto también el problema de los lisiados. El gobierno estaba dispuesto a no introducir en la negociación de los 22 presos la exigencia de libertad de los alcaldes, pero el FMLN no estaba dispuesto a dejar en libertad a la hija del presidente sin que quedara resuelto el problema de los lisiados, aunque por

éstos ofrecía la libertad de los alcaldes y de los funcionarios locales. Los límites de negociación por parte del gobierno aparecían claros, pues era evidente que desde un punto de vista político le convenía liberar simultáneamente a los alcaldes con la hija del presidente. Hasta el secuestro de ésta era poco lo que el gobierno había hecho por la liberación de los alcaldes; después del secuestro, la liberación de los alcaldes había quedado también en muy segundo plano. Esta posición debilitó al presidente tanto ante el pueblo salvadoreño como ante su propio partido, cuyas bases exigían más efectividad respecto de los alcaldes, quienes en su gran mayoría eran correligionarios. Que no pudiera lograr esta simultaneidad demuestra la dificultad de conceder la salida de los lisiados del país. La dificultad puede sospecharse que se fundamentaba en dos motivos: el gran número de lisiados iba a parecer que se trataba de un trato desigual con clara ventaja para el FMLN (121 contra 25) y asimismo la salida de los lisiados suponían una ventaja militar para el FMLN que de momento se veía liberado de la pesada carga de cuidarlos y transportarlos.

La reunión de Guazapa se tuvo el día 15 de octubre. En la comunicación subsiguiente, el comando Pablo Pedro Castillo (18 de octubre) admitió tácticamente la prioridad del caso Inés -22 presos, pero exigía también la evacuación de los lisiados contra la entrega de los alcaldes. Había habido un cierto acercamiento y una cierta concesión por ambas partes, pero todavía no se llegaba a una convergencia aceptable para unos y otros. Ambos canjes se deberían realizar según el FMLN el 22 de octubre, pero el gobierno no estaba en capacidad inmediata de hacerlo porque no tenía resuelto el problema de los lisiados y porque el FMLN insistía de algún modo en que debía proseguirse la investigación y las explicaciones consiguientes, no sólo de los 9 desaparecidos incluidos en la lista de 34 presos presentada inicialmente al gobierno, sino también de más de 3.000 capturados y desaparecidos durante los últimos 5 años, cuyo registro posee el FMLN.

La situación era tanto más difícil cuanto que los representantes de la Iglesia habían trasladado al gobierno, a raíz de la reunión de Guazapa, exigencias menores en un primer paso, aunque mayores en un segundo momento. Por otra parte, las informaciones públicas optimistas que algunos miembros de la Iglesia habían dado, fundadas en hechos reales, enturbiaron un tanto el proceso. Así se pasó de nuevo de un claro optimismo

La embajada norteamericana desde un principio estuvo contra la negociación y a favor de medidas de fuerzas.

Los enemigos del diálogo buscaban una mala solución al problema.

a un profundo pesimismo. Otra vez apareció el fantasma de la ruptura de negociaciones y con ella la posibilidad, nunca descartada, de que se buscasen soluciones inmediatistas y superficialmente más lógicas desde el punto de vista político que pusieran en peligro la vida de muchos inocentes o, al menos su libertad y salud, y sobre todo que pusieran en peligro el proceso de diálogo y pacificación y, con ello, se vinieran males mayores aún para el pueblo salvadoreño. Pero, por otro lado, se constataba voluntad de arreglo por ambas partes. La Iglesia había podido palpar esta voluntad y por eso no se desalentó ante este nuevo contratiempo. El pesimismo era mayor por parte del gobierno, el cual se veía acorralado por el correr del tiempo y por las crecientes presiones políticas y militares, del FMLN, el cual claramente había pasado de una situación desventajosa políticamente, por el mal efecto del secuestro, a una situación mejor, por las posibilidades que se le estaban ofreciendo.

El propio 18 de octubre el FMLN ofreció por primera vez una reunión directa entre plenipotenciarios del FMLN y plenipotenciarios del gobierno ante la presencia de Mons. Arturo Rivera y Damas y el Padre Ignacio Ellacuría. Se traba de operativizar el acuerdo, pues se suponía que el presidente Duarte había aceptado la última propuesta del comando Pedro Pablo Castillo. Esto no era así y por eso, la propuesta de operativización suponía en el fondo un intento de negociación directa que debería alcanzar un acuerdo definitivo, tanto sobre el fondo como sobre la operativización. La propuesta fue aceptada por el gobierno el cual eligió la alternativa de Panamá para tener las conversaciones.

El día 20 de octubre pudo instalarse la reunión en la ciudad de Panamá con el apoyo y protección de sus autoridades. Asistieron dos plenipotenciarios del FMLN, dos plenipotenciarios del gobierno y dos representantes de la Iglesia propuestos y/o aceptados por ambas partes. No se trataba formalmente de una prolongación del diálogo roto en Ayagualo, pero las circunstancias nuevas que habían tenido tanto de negativo, estaban posibilitando que el FMLN y el gobierno se sentaran a dialogar y negociar sobre algo que podría considerarse como perteneciente

a la humanización del conflicto, ante los buenos oficios de la Iglesia. En este diálogo-negociación faltó el FDR. Esta nueva ronda no se consideró como continuación de la de Ayagualo, porque en ella no se siguieron los procedimientos convenidos entonces. Quizá por ello el FMLN no se opuso a que se tuvieran conversaciones privadas y fuera del país, ni pensó que esto suponía precedente o concesión alguna a las posiciones del gobierno sobre este punto. Pero el hecho es que se tuvo un diálogo efectivo entre el FMLN y el gobierno, ante la Iglesia y que este diálogo llegó a conclusiones negociadas, cuya ejecución fue casi inmediata. La ausencia del FDR estaba justificada porque no se hizo cargo en ningún momento del secuestro de Inés Guadalupe y de su compañera y porque no se podía ofrecer como mediador entre el FMLN y el gobierno.

Las negociaciones de Panamá no debieron ser fáciles por cuanto duraron 3 días. Y es que a Panamá se llegó con posiciones bastante distantes, no obstante la voluntad seria de acuerdo que ambas partes mostraron siempre. Los puntos esenciales del FMLN eran el canje de la hija del presidente y de su compañera por los 22 presos, la evacuación de los lisiados por la libertad de los 23 alcaldes, pero además exigía un compromiso a futuro de que serían liberados 29 sindicalistas presos y que Duarte daría más información sobre los 9 desaparecidos. El gobierno mantenía su oferta de los 22 presos —ya había liberado a otros 3— por la hija del presidente y su compañera, dejando para más tarde abierta la posibilidad de que la necesidad objetiva de negociar la libertad de los alcaldes podría conducir en un tiempo prudencial a resolver el problema de los lisiados, sobre todo si la Iglesia insistía en la obligación moral que había de atenderlos adecuadamente por su condición de tales. Ambas partes habían cedido en sus exigencias o por lo menos habían graduado y jerarquizado la importancia y la posibilidad de las mismas. Había habido un largo proceso de ambientación del problema y de la necesidad de su solución y de aproximación de las posturas, impulsado sobre todo por los representantes de la Iglesia quienes captaron bien lo razonable de algunas peticiones y lo difícil de alguna concesiones. Si alguien, la Iglesia buscaba una

De hecho, se tuvo un diálogo efectivo entre el FMLN y el gobierno ante la Iglesia y en ese diálogo se llegó a conclusiones negociadas, cuya ejecución fue casi inmediata.

solución maximalista donde se lograra, no sólo lo más justo, sino incluso lo óptimo para la humanización del conflicto y para la facilitación del proceso de diálogo estancado hace ya casi un año. Pero se percibía por parte de la Iglesia el peligro de ruptura que podía traer un empecinamiento en posturas y exigencias maximalistas. Pareciera que su mediación fue fructífera, pues en Panamá se llegó a resultados. Agencias internacionales de prensa anunciaron el día 22 que en la madrugada de ese día se había firmado un acuerdo del que, sin embargo, no se conocían sus términos precisos. Más aún informaron de la presencia del general Noriega, no en el proceso negociador, sino en una reunión informal con todos los participantes. Y aunque Mons. Rivera voló de regreso en la mañana del día 22, lo cual podía hacer suponer que ya se había llegado a un arreglo en lo fundamental, las conversaciones debieron de seguir durante toda la mañana de ese día, pues la delegación gubernamental no regresó hasta la tarde de ese mismo día.

La reunión en Panamá, de la que hay poca información precisa en fuentes escritas o habladas ya publicadas, presenta dos cuestiones principales: a) qué es lo que posibilitó el arreglo cuando las posiciones eran tan distantes; y b) cuáles fueron los acuerdos a que llegaron.

Los acuerdos a que llegaron pueden deducirse, al menos en parte, de lo que ya se ejecutó de los mismos. El día 24 de octubre a las 11 a.m., se hizo la entrega simultánea de los 22 presos a la Iglesia, al Comité Internacional de la Cruz Roja y al cuerpo diplomático y de Inés Guadalupe y Ana C. Villeda a la Iglesia, al Comité Internacional de la Cruz Roja y al cuerpo diplomático; ese mismo día fueron canjeados en acciones también simultáneas, al menos en su final, 25 alcaldes y funcionarios locales por 101 lisiados quienes salieron del país en aviones facilitados por Panamá y México. Nada en cambio ha aparecido hasta ahora del compromiso exigido al gobierno por el FMLN de responsabilizarse de los 9 desaparecidos y de procurar la libertad de los 29 sindicalistas y miembros de las organizaciones populares. Podría pensarse que ante esta flexibilidad del FMLN, la parte gubernamental se habría mostrado flexible en el caso de los li-

siados. Sin embargo, tanto el gobierno como la Iglesia han hablado de otros compromisos privados. ¿Cuáles pueden ser? El gobierno ha hablado de un compromiso moral del FMLN de no secuestrar en el futuro a familiares de políticos y militares. Esta medida, entendida como una línea de acción política que busca la humanización de la guerra y del conflicto en general, es desde luego de singular importancia. No carece de precedentes en las manifestaciones del FMLN hasta el punto de que el conocimiento de esos precedentes llevó a algunos analistas a estimar que no podía ser el FMLN quien hubiese perpetrado una acción de este tipo. Más aún, en la propaganda se insistía en que no había sido capturada la hija del presidente por serlo, sino por ser una funcionaria del aparato de propaganda del partido y del gobierno. Esto quiere decir que estaban ofreciendo disculpas por secuestrar a un familiar y, por tanto, que no estiman correcto el hacer habitualmente este tipo de acciones. Pero el reforzar explícitamente una línea política y convertirla en norma de acción de modo que ya no se fueran a dar más secuestros de familiares, supone un notable avance, sobre todo si de la parte gubernamental se refuerza explícitamente la obligación legal de impedir toda forma de secuestro y de castigo a quienes, como arma de contrainsurgencia, utilizan el secuestro o su equivalente para destruir al enemigo. Es claro que la Iglesia está muy interesada en lograr un consenso obligante sobre este punto, pues ella ha combatido los secuestros, tanto los hechos por el FMLN como los perpetrados por las fuerzas gubernamentales. En este sentido, el condenar toda acción que lleva a aumentar el número de secuestros o de desaparecimientos y el rechazarla como norma de acción política era algo en sí mismo importante y algo hasta cierto punto nuevo —al menos en lo que tenía de seguridad renovada y fortalecida—, lo cual podría haber dado paso al desatascamiento de las negociaciones en el problema de los lisiados.

Este último punto pudo ayudar a alcanzar el arreglo que superaba posiciones distantes. Pero puede pensarse que hubo otros factores. Ambas partes tenían voluntad seria de alcanzar el acuerdo por la cuenta que les tenía, ya que tanto una como otra estaban poniendo en peligro grave

líneas estratégicas y logros tácticos de importancia. Asimismo la presión internacional pesaba especialmente sobre el FMLN, pues países amigos, no excluidos Cuba y Nicaragua, buscaban una solución rápida y justa. Finalmente, la Iglesia se esforzaba en mostrar la necesidad de llegar a un acuerdo razonable donde no se enfocara la solución desde la perspectiva de vencedores ni vencidos, sino desde la perspectiva de qué era mejor para las personas involucradas en los canjes y para la renovación de las soluciones políticas dialogadas como medio fundamental de arreglo del conflicto.

El hecho es que, por primera vez, se llegó a un acuerdo de envergadura entre el gobierno y el FMLN por medio del diálogo directo, un acuerdo que se puso en práctica inmediatamente. Arreglos prácticos los había habido anteriormente, sobre todo respecto de lisiados y también respecto de prisioneros y aun de secuestrados. Pero el arreglo de Panamá no sólo tiene las características de un diálogo oficial entre el FMLN y el gobierno ante los buenos oficios de la Iglesia, sino que adquiere una dimensión pública y aun internacional notoria, además de llegar a resultados puestos en ejecución inmediata.

Efectivamente, la ejecución del complejo acuerdo se llevó a cabo menos de 48 horas después de haberlo pactado. El día 24 de octubre a primeras horas de la madrugada se puso en

marcha el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Iglesia y el cuerpo diplomático para poder llevar a cabo en el mismo día la maniobra de la evacuación de los lisiados. A las once de la mañana del mismo día se dio el canje de la hija del presidente y de su compañera por los 22 presos y a las tres de la tarde comenzó la entrega de los alcaldes en distintos lugares del país. Se llegó a un acuerdo no sólo en lo fundamental, sino también en los detalles operativos no sin tensiones y desconfianzas mutuas.

En la ejecución de lo acordado caben señalar algunos aspectos importantes. La Fuerza Armada acató con gran disciplina lo pactado por el gobierno y el FMLN, no obstante las discrepancias que pudiera haber habido en su seno a la hora de aceptar como mejores unas u otras soluciones. Hubo algún pequeño contratiempo que llevó a combates y puso en peligro a los lisiados, pero fue más debido a la defensa civil que a la propia Fuerza Armada. Prácticamente, durante todo el día 24 hubo lo equivalente a una tregua para facilitar los canjes que se daban en San Salvador, Tenancingo y Guazapa, en Chalatenango, Morazán, Usulután, prácticamente en todo el territorio central y oriental. El FMLN no hizo problema de que el número de 23 alcaldes pactados se elevara a 25, aunque a última hora el gobierno presentó una lista de 34 capturados, de la cual el FMLN probablemente por falta de



tiempo, no pudo responder. Tampoco el gobierno hizo problema de que los 96 lisiados de la lista se convirtieran en 101. Lo que estaba en juego no era la materialidad de los números, sino lo fundamental del concepto: se quería dar libertad a todos los secuestrados y se quería evacuar a todos los lisiados y heridos. El Comité Internacional de la Cruz Roja mostró una gran capacidad profesional, además de humanitaria, pues a él se debe la efectividad de la operación. Fue asimismo de gran transcendencia el aporte de los embajadores y de las embajadas. Con excepción de los embajadores de Estados Unidos, Chile, Paraguay y Taiwán por razones obvias —el caso de la Santa Sede tiene otra explicación—, todos los embajadores dieron su respaldo muy efectivo a la operación. Esto significa, supuesto que era a petición de ambas partes, que la operación era respaldada internacionalmente, lo cual indica que no se trataba de algo ajeno al derecho internacional, pues de lo contrario no hubieran participado, ni siquiera por razones humanitarias, países de gran tradición democrática como la República Federal de Alemania, México, Panamá, Colombia, España, Francia, etc. Muchos de estos embajadores tuvieron ocasión de conversar con la guerrilla y sus comandantes y asistir a los actos formales de canje que se desarrollaron con gran dignidad y respeto mutuo entre las dos partes en conflicto. Finalmente es interesante señalar el modo de despedirse de las dos mujeres cautivas de sus cuidadores; según los testigos, acaeció entre lágrimas de ambas partes y afectuosos saludos, que no dejaron de impresionar a los embajadores testigos.

El resultado feliz de esta operación ha calmado de momento las reacciones. Pero es pronto para determinar las consecuencias del desgaste del presidente en estos 40 días. Los sectores derechistas lo han acusado de subordinar los intereses nacionales a los intereses paternos. La Fuerza Armada considera que es más lo que se ha dado que lo que se ha recibido y ha habido comandante que se ha atrevido a afirmar que se ha perdido militarmente en un mes lo que se había ganado en un año. Hay quien piensa que pronto le pasarán la factura a Duarte y a quienes le han ayudado decisivamente en esta ocasión.

Por el otro lado, el FDR ha quedado desvirtuado parcialmente. El no poder impedir prácticas como las de la zona rosa o las del secuestro de la hija del presidente por parte del FMLN, hace ver las limitaciones en las que se ve encerrado a la

hora de las grandes decisiones. Se habla de una crisis en la unidad de los dos frentes y se subraya la subordinación casi total del frente democrático al frente revolucionario. Su escasa participación en la solución del problema ha hecho que la parte gubernamental pierda su interés en hablar con el FDR como contraparte en el diálogo.

De momento, por tanto, nada ha cambiado sustancialmente, a pesar de lo prolongado y profundo de la crisis. Así parece indicarlo el endurecimiento de las operaciones militares para las que el día del canje no fue sino un breve paréntesis, indicativo además de cuáles podrían ser los lugares precisos donde el FMLN tiene sus campamentos. Han vuelto a aparecer frentes femeninos y asociaciones ya conocidas con ataques similares a los que la derecha está acostumbrada a hacer bien que con un tono más suave que el antiguo. Inmediatamente después del arreglo ha tenido lugar un nuevo secuestro, ahora de un coronel, quien tenía a su cargo la dirección general de la aeronáutica civil y se había expuesto excesivamente en territorio de fácil acceso a la guerrilla. Finalmente el presidente Duarte, recién terminada la crisis, ha salido para una larga estancia de 5 días en Estados Unidos y una breve en España, con lo cual estaría demostrando que su posición presidencial no está en peligro a la par que su fuerza mayor está en el apoyo de la administración Reagan.

Obviamente nada va a cambiar abruptamente. No obstante han ocurrido cosas que no dejarán de afectar al proceso y que patentizan, al menos, tendencias y tensiones importantes, que merecen ser analizadas puntualmente.

1. La situación del país está muy lejos de ser normal y de haberse estabilizado. Esto que debería ser claro para quienes analizaran responsablemente el estado de guerra permanente y la fuerza militar y organizativa del FMLN, pero que tiende a minusvalorarse en razón de la prolongación del conflicto, ha saltado a primer plano con toda intensidad. No sólo el gobierno ha tenido que sentarse frente a frente con el FMLN para negociar, sino que ha tenido que hacer concesiones importantes. Pero quizá lo más significativo es que ha vuelto a surgir la certeza de la limitada democratización de este gobierno en un punto esencial: a este gobierno no sólo le es imposible dar razón de más de 4 mil desaparecidos y 50 mil asesinados, cuya responsabilidad es de los gobiernos anteriores y de la Fuerza Armada, sino que le es imposible justificar su conducta an-

Lo más significativo es que ha vuelto a surgir la certeza de la limitada democratización en un punto esencial: a este gobierno le es imposible dar razón de más de 4 mil desaparecidos y 50 mil asesinados y le es imposible justificar su postura ante los nuevos desaparecidos

te los nuevos desaparecidos, ocurridos en la presidencia actual. El FMLN, entre los 9 desaparecidos de los que pedía explicación a Duarte, presentó hábilmente el caso de algunos anteriores a la actual presidencia, pero otros casos presentados ocurrieron en los meses transcurridos de 1985. Ciertamente, el número es mucho menor del que se presenta para 1980-1982 y aun 1983, pero se sigue dando el mismo problema, del cual lo más grave no es que ocurra, sino que el presidente de la república no puede dar razón de ello, con lo que se demuestra su poco control sobre este problema tan grave. Entre los métodos de contrainsurgencia no sólo están las capturas dadas a conocer, las torturas psicológicas, sino también los bombardeos indiscriminados, los asesinatos de civiles en zonas de combate y los desaparecidos. A los representantes de la Iglesia, según sus manifestaciones, fue obvio todo esto tanto por los testimonios que recibieron en el lugar de los hechos como por la imposibilidad de poder dar una explicación adecuada de los desaparecidos.

2. Esto no significa que deban ignorarse ciertos avances en la democratización. Arreglos como el actual no hubieran sido posibles años atrás. El presidente de la república tiene una cierta solidez la cual le permite actuar con alguna autonomía relativa. Ciertamente no hubiera podido hacer las concesiones que hizo sin el permiso de la Fuerza Armada, que sigue teniendo un peso político decisivo a la hora de tomar determinaciones serias. Pero, por otro lado, el presidente cuenta con una cierta capacidad de maniobra con los militares, pues tiene entre ellos quienes están convencidos de que el proyecto democristiano coincide fundamentalmente con el proyecto norteamericano en lo que éste tiene de triunfo militar sobre el FMLN a través de un robustecimiento y profesionalización de la Fuerza Armada. En tiempos pasados una sacudida como esta hubiera supuesto la caída del presidente. Hubo entre los militares quien la pidió. Pero esta petición ponía en peligro grave toda la imagen que Estados Unidos necesita para poder llevar adelante su guerra de contrainsurgencia. Por otro lado, el que en Mariona y en otras instalaciones

hubiera presos de mucha importancia en las filas del FMLN implica que la violación de los derechos humanos no tiene ya los mismos caracteres bárbaricos de años atrás.

3. Esta situación anormal lleva consigo la necesidad de acudir a acciones anormales. Anormal es el secuestro de la hija del presidente como forma de lucha, pero anormales son también los desaparecidos e incluso los capturados y encausados en virtud de declaraciones extrajudiciales, arrancadas sin ninguna garantía. El FMLN insiste en que la guerra que conduce es irregular, dadas las condiciones objetivas en que debe desarrollarse, pero esa guerra irregular puede convertirse fácilmente en guerra sucia. Igualmente desde el lado gubernamental es bien sabido con qué facilidad la guerra de contrainsurgencia puede convertirse y se convierte de hecho en guerra sucia. Reducir lo sucio a solamente lo irregular en el caso del FMLN, someterse estrictamente a las leyes en el caso del gobierno, se presenta como una urgencia ineludible para no caer en problemas mayores. Pero cuando estos problemas surgen, como en el caso del secuestro o en el caso que originó el secuestro, las soluciones no pueden ser normales, formalmente legales. Se requieren soluciones extraordinarias, lo cual es tanto menos de extrañar cuanto la estructura social y política actual, lejos de estar consolidada y debidamente formalizada, está en estado de fluidez permanente y aun de contradicción entre partes que han hecho del conflicto una guerra civil.

4. La anormalidad de la situación exige acudir a principios básicos de humanidad. Es lo que ocurrió en este caso. Principios de humanidad prevalecieron sobre principios positivos legalizados. Esto es esencial en el actual proceso salvadoreño. Lo es, en primer lugar, porque no hay una legalidad reconocida por ambas partes en conflicto y lo es, en segundo lugar, porque la humanización de las acciones, además de suavizar los males del conflicto, lleva a la humanización de las actitudes y con ello a la humanización de los contendientes, punto de esencial importancia en sí mismo, pero también en orden a posibilitar un diálogo real y en orden a sacar de la lucha todo

La situación anormal lleva consigo la necesidad de acudir a acciones anormales.

Anormal es el secuestro de la hija del presidente como forma de lucha, pero anormales son también los desaparecidos y capturados y encausados en virtud de declaraciones extrajudiciales.

aquello que puede sacarse, en especial todo lo que sea puramente pugna civil y política, que debiera ser respetada.

5. El diálogo puesto a prueba dio en esta ocasión buenos resultados. El diálogo necesario se hizo posible y en su posibilidad demostró la necesidad de continuarse y de ampliarse. Forzados por una situación más urgente que grave, ambas partes en conflicto se pusieron a dialogar y negociar, cosa que en abstracto y en general parecía difícilísimo de conseguir por razones de procedimiento. Los fantasmas del diálogo táctico, publicitario, engañoso, desaparecieron súbitamente. Cuando hay interés serio en resolver equitativamente un problema real, el diálogo es posible, sobre todo si es llevado a cabo en determinadas circunstancias de privacidad y por personas, que saben defender sus intereses firme, pero razonablemente, por personas que saben medir lo que es políticamente posible y que saben que en un diálogo/negociación las dos partes deben salir ganadoras, cuando no se trata de una rendición resultado de una prepotencia. Cuando el diálogo es realmente necesario es que ambas partes tienen su porción de verdad y esa porción de verdad debe ser reconocida, no sólo en formulaciones teóricas, sino en concesiones efectivas. El que esta experiencia haya acercado humanamente a los negociadores y el que haya dado resultados aceptables, es uno de los logros más positivos, en cuanto puede acercar la hora del reinicio del diálogo, quizá con otras formas de las proyectadas. La línea de la humanización parece no sólo necesaria, sino de buenas perspectivas para hacer progresar el diálogo hasta sus últimas virtualidades.

6. La presencia de mediadores creíbles en estas situaciones anormales y en su solución paulatina a través del diálogo es absolutamente necesaria. Hay una tal desconfianza entre las partes que siempre está al acecho una lectura peyorativa de cualquier acontecimiento; hay tantos intereses contrarios, tan apasionadamente asimilados, que es difícil sin mediación sobrepasar subjetivismos intransigentes. Es bien difícil encontrar mediadores aceptables para ambas partes y es improbable que la acción de los mediadores deje por igual sa-

tisfechos a los bandos contrarios. Pero lo que se mostró factible en La Palma y Panamá debe continuar siéndolo. La Iglesia, cierta parte de la Iglesia, está en tal condición. De ahí el cuidado máximo que ha de tener para no perderla. A punto estuvo de hacerlo con la última carta pastoral colectiva sobre el diálogo, pero la credibilidad acumulada pudo sobrepasar esta situación delicada. Independientemente de esto no puede negarse la confianza enorme que deposita el pueblo pobre en la figura del arzobispo, sea la que fuere la posible desconfianza de los dirigentes. Cuando los mediadores mismos están unidos en lo fundamental puede resultar conveniente que, independientemente de su capacidad y de su conocimiento de la situación, haya un cierto pluralismo, de tal forma que el equipo mediador sea creíble a ambas partes, aunque alguno de los miembros sea más creíble a una que a otra.

7. Hay un decidido apoyo internacional a favor del diálogo, al menos en su primera fase de humanización. No hubo embajador solicitado ni país ni organización requeridos que no prestasen su apoyo al diálogo y a la solución del conflicto. Que países como Francia y Alemania aceptaran lisiados, aunque fuera no como combatientes formales, sino simplemente como heridos en la guerra, es de por sí un signo renovado y un reconocimiento tácito de que se apoya el diálogo con algunas de sus consecuencias. Que países como México, Panamá, Alemania y Francia fueran testigos de la entrega de prisioneros del FMLN a comandantes del FMLN, quita la sombra de terroristas a los guerrilleros salvadoreños. No es pensable que una representación así se hiciera presente ante un caso de puro terrorismo. Esto no significará un reconocimiento positivo del FMLN como parte contendiente, pero significa un no cerrarse a la realidad y un saber superar deformaciones ideologizadas y propagandizadas. En el otro extremo está Estados Unidos que no era partidario de ninguna forma de negociación, ni de reconocimiento del FMLN a quien, con ocasión del secuestro de la hija del presidente, se acusó de terrorismo criminal, olvidando hechos muchos más graves ocurridos con sus patrocinados. Si gran parte del mundo democrático apoya

el diálogo de forma efectiva, no lo hace así Estados Unidos, pese a sus declaraciones en contrario.

8. Esto mostró un pequeño margen de maniobra del gobierno de Duarte frente a las presiones norteamericanas. Duarte pudo contar en esta ocasión con la ventaja de ser "re-querido" por la administración Reagan para desarrollar su política en Centroamérica y para cumplir con sus designios en El Salvador. Este requerimiento significa por un lado que Reagan "quiere" que Duarte se mantenga en la presidencia, pero por otro lado significa que lo "requiere" en su doble sentido de necesitarlo, pero también de exigirle determinados comportamientos los cuales no pueden ser traspasados. Así hay que interpretar las declaraciones de Duarte sobre el terrorismo y la acusación improcedente —al tomar la parte por el todo— de que Nicaragua representa la base de operaciones de la guerrilla. En cuanto Duarte es querido por la administración Reagan tiene un cierto capital propio que le permite, por ejemplo, confiar en que, si no se sobrepasa y entra en contradicción con la línea norteamericana de acabar con la guerrilla, no tendrá un golpe de Estado por parte de los militares. Pero en cuanto Duarte es requerido por la administración

tiene su campo de maniobra real muy reducido, tanto por razones internas como por la presión norteamericana.

9. El resultado de toda la operación es ambiguo para el gobierno. Por un lado, ha sido forzado a negociar y a ceder en puntos importantes, de los cuales el de mayor significado es el de los presos políticos, máxime que volvieron a la guerrilla en su mayor parte; además, para lograr estas concesiones ha tenido que negociar con la Fuerza Armada a la que habría puesto en división interna y le habría dado pretextos para disculpar su inefectividad en la lucha puramente militar; finalmente ha abierto un precedente que, si se cierra, va a repercutir sobre su gestión presidencial, mientras que, si sigue abierto, lo deja en condiciones precarias, ya que podría conducir a una crisis todavía mayor. Pero, por otro lado, ha conseguido resolver a última hora el caso de los alcaldes, ha hecho avanzar el proceso de humanización del conflicto, ha conseguido una reiteración formal de que se respetará a los familiares de militares y políticos, ha mostrado que la mejor solución no es la de la fuerza torpe y ha abierto nuevas posibilidades al diálogo. Pero, sobre todo, ha evitado una solución catastrofista, que hubiera radicalizado al FMLN y que hubiera



retrotraído el proceso a etapas donde la violencia volvería a ser la norma del conflicto, una violencia bárbara y sanguinaria con caracteres formales de terrorismo de Estado. Ha evitado lo peor y ha conseguido algunos resultados buenos, aunque ha tenido que hacer concesiones importantes a sus enemigos.

10. Quien ha quedado malparado es el FDR. Una vez más ha aparecido que el FMLN no toma en cuenta al FDR para adoptar medidas políticas de singular importancia y, lo que es peor, las toma, no importa el mal que pueda hacer a la imagen política de su aliado. Aunque ésta no fuera la realidad, ésta es la apariencia ante la mayoría del pueblo salvadoreño y ante naciones y organismos internacionales. Al parecer, el FDR ni siquiera es avisado a tiempo para poder precisar su posición. Esta actitud fundamental que era lo habitual en los primeros tiempos de la alianza entre revolucionarios y democráticos pareció haberse superado a la hora de programar las grandes estrategias políticas, primero del gobierno democrático-revolucionario y después del gobierno de amplia participación, así como al momento de planificar los pasos del diálogo, hasta el punto de haber sido el FMLN quien habría superado la propuesta de Duarte que sólo invitaba al FMLN al diálogo de La Palma y habría exigido la presencia del FDR en él. Acontecimientos como los de la zona rosa y los del secuestro vuelven a poner en baja la participación del FDR y la autonomía que le corresponde. Si el diálogo no cobra fuerza pronto y si la prolongación del conflicto se vuelve inevitable, el FDR entrará ya en la pista de descenso, a no ser que cambie la forma de relación con el FMLN y, sobre todo, su forma de presencia dentro del país. El FDR tiene cada vez implantación menor en la conciencia ciudadana, sobre todo en la conciencia de las masas, y su dirigencia sigue el peligroso juego de un gobierno en el exilio, el cual sólo se sostiene por su estructura formal y por el reconocimiento internacional que se le atribuye. El FDR carga así con los efectos negativos en que incurre el FMLN, pero apenas se apunta los efectos positivos que el accionar de éste obtiene en el interior del país. Probablemente se va acercando la hora política en que el FDR tenga que redefinir su estrategia y el modo de su presencia y actividad dentro del país, la cual ya no puede reducirse a pronunciamientos reproducidos en los medios de comunicación, sino que tiene que extenderse a la organización de partido con cuadros y masas y al crecimiento de los mis-

mos entre los partidarios potenciales que corresponden a sus posiciones.

11. En cambio el FMLN ha obtenido en esta ocasión triunfos notables a partir de iniciales resultados sumamente negativos tras el rechazo masivo del secuestro de las dos mujeres. El FMLN había considerado que la recuperación de sus cuadros, presos en las cárceles del gobierno, era motivo más que suficiente para afrontar el repudio internacional por su acción. Pero la complejidad de la situación del país y el mal manejo del asunto por la involucración apasionada del presidente fue convirtiendo todo a su favor. No sólo recuperó a sus cuadros principales y logró evacuar a un centenar largo de lisiados, sino que pasó a ocupar un primer puesto político obligando al gobierno a negociar directamente con él. Poco a poco se fue olvidando la inhumanidad de su acción primera y fue pasando a primer plano su efectividad político-militar. No era un grupo cualquiera de terroristas el que estaba negociando, sino un verdadero poder político-militar, que apelaba a una medida de fuerza controlada porque no había sido atendido por otras vías. Logró la colaboración de países democráticos en la resolución del caso y obtuvo el situar al gobierno en un trance crítico, el cual pudo tener sus lados positivos en cuanto fue superado, pero que conllevó riesgos y desgastes, cuya valoración es todavía prematuro hacer. Si se junta todo esto a sus simultáneos triunfos militares que desechan el juicio precipitado de que acciones como las del secuestro son fruto de desesperación ante fracasos militares continuados, más bien se aprecia un reforzamiento de su estrategia general, el cual no deja de ser sentido como tal por la Fuerza Armada, por el gobierno y por el pueblo salvadoreño. El claro desgaste inicial que sufrió por su acción fue finalmente contrarrestado por su disposición al diálogo, por su esfuerzo de resolver humanitariamente el conflicto. La entrega de los alcaldes, punto descuidado por Duarte, y su disposición a aceptar ciertas formas de humanización del conflicto y, sobre todo, a dialogar sobre formas más profundas y seguras de humanización, mostró que no todos sus planteamientos son inmediatistas y que, cuando lo son, está en condiciones de revertir un flujo contrario en otro a favor. No hay duda de que todo esto ha redundado en una sensación de triunfo, que ha vigorizado su moral combativa y también la seguridad ante su propia estrategia. Jugó una carta muy arriesgada y le salió bien el envite. No obstante pudo salirle mal; más aún es-

Cuando hay interés en resolver un problema real, el diálogo es posible, si es llevado en determinadas circunstancias de privacidad y por personas que saben defender sus intereses firme, pero razonablemente.

tuvo a punto de salirle mal, esto es, a punto de no conseguir la libertad de sus cuadros y de quedarse con fama internacional de terroristas, mientras se robustecía la imagen democrática de Duarte. De todo ello queda en claro que no se pueden prodigar las medidas extremas y queda también claro que una cierta flexibilidad a la hora de negociar, no exenta de firmeza, puede conseguir resultados importantes, además de lograr una mejora creciente de su imagen política. Acciones de guerra sucia y acciones estrictamente terroristas pueden ser eficaces en una consideración inmediata, pero se pagan caras a la larga.

12. Las negociaciones realizadas han dejado puntos capitales pendientes que en sí mismos exigen solución y que pueden servir de ocasión para entrar en una serie de diálogos puntuales que concluyeran en un definitivo diálogo-negociación. El problema de los desaparecidos sigue en pie, pero sobre todo sigue pendiente el problema de una política de desaparecimientos: el actual régimen de Duarte no puede permitirse la posición, al menos pasiva, que respecto de los desaparecimientos hubo en el periodo 1980-1982; las dificultades de la negociación, para no insistir en el ejemplo de Argentina respecto de los responsables de los desaparecimientos, muestran como a la larga la política de los desaparecimientos y de los asesinatos lleva a un callejón sin salida, al convertirse en una deuda política que pesa implacablemente sobre cualquier gobierno de pretensiones democráticas. Igualmente sigue en pie el problema de los presos políticos y de la legislación que los posibilita y esto no sólo por razones de humanidad, sino por razones estrictamente políticas, puesto que sólo cuando sea posible y segura una actividad política no violenta se podrá pensar en el abandono de las armas como medio de lucha. Asimismo sigue sin resolver el problema de los alcaldes en territorio cuya seguridad no puede ofrecer el gobierno en razón de las necesidades y de la realidad de la guerra; es un problema de difícil solución por su complejidad política, pero es un problema grave que merece consideración y arreglos pragmáticos. Todo el campo inmenso de la humanización de la guerra está todavía sin tratar y sin arreglar, cuando resulta impostergable hacerlo, sobre todo si ambas

partes están convencidas de la prolongación indefinida y creciente de la guerra. Toda esta acumulación de problemas está clamando o por diálogos sucesivos entre el gobierno y el FMLN o, lo que sería más deseable, por un sistemático proceso de diálogo-negociación que fuera de lo más urgente y/o fácil a cuestiones más graves, sin cuya solución el conflicto no hará sino agravarse.

Si el caso de los secuestros obliga a repensar seria y colectivamente en estos doce puntos de reflexión y ayuda a proponer soluciones para ellos, mucho se habría avanzado. Como quiera que sea, esos mismos doce puntos son la mejor demostración que el caso de los secuestros y de su solución ha tenido una importancia política sobresaliente. Aunque el curso fundamental del conflicto no vaya a cambiar de inmediato, en las aguas del mismo se han introducido elementos nuevos que tal vez sean capaces de abrir cauces alternativos.

Postscriptum. Este largo proceso de los secuestros terminó de momento en brazos de Reagan. A la semana de recuperación de su hija, el presidente Duarte y ella han ido a visitar a Reagan. Algo por demás significativo. No es un gesto humano de agradecimiento, sino un gesto político de sumisión, máxime si se meditan las palabras que el mandatario salvadoreño ha pronunciado con ocasión de su visita. En ellas se acusa a Nicaragua de ser causa principal del secuestro e incluso causa inmediata. El presidente Duarte sabe o debe saber que esto es mentira; más aún, sabe que los nicaragüenses y, en particular el presidente Daniel Ortega, se esforzaron por conseguir una pronta y humana solución al caso de los secuestros. El secuestro de su hija se programó y se realizó por salvadoreños en El Salvador y desde El Salvador. Si se utilizaron comunicaciones radicales o telefónicas desde Nicaragua, también se hizo lo mismo desde varios países europeos. No es cierto que las consultas definitivas se hicieran con Nicaragua sino, a lo más, a través de Nicaragua. Pero la administración Reagan necesita mantener la tesis del terrorismo nicaragüense y Duarte se inclina ante esta necesidad. Pero la cerviz inclinada ante Estados Unidos no ha sido



nunca la mejor posición para ver y comprender la realidad latinoamericana. Bien está que se combata el terrorismo en Centroamérica, pero El Salvador, Guatemala y Honduras saben bien que el mayor terrorista en nuestra región han sido en los últimos años los estados y los gobiernos de esos países. Sólo reconociendo esto se está en condiciones morales de condenar e impedir el terrorismo que puedan perpetrar los guerrilleros. Hay que definir lo que es el terrorismo para poder llamar terroristas a quienes lo practican, pues no es lógico definir como terrorismo cualquier acción de los guerrilleros y consiguientemente lla-

mar a estos terroristas. Lo que Duarte había ganado moral y políticamente rechazando una respuesta violenta y terrorista ante el secuestro de su hija y proponiendo soluciones políticas para resolverlo, lo vino a perder en parte con su desafortunada visita a Reagan. De ella habrá sacado respaldo político frente a los extremistas de derecha —cosa importante—, pero con ella ha perdido credibilidad ante quienes ven la obligación y la necesidad de hacer una política nacional sin injerencias determinantes de países ajenos.

San Salvador, 31 de octubre de 1985.